

Proyecto de Ley Numero ____ de 2020
**“Por medio del cual se crea la ley integral de la mujer para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y se dictan otras
disposiciones”**

Bogotá DC. 20 de Julio de 2020
Doctor,
Gregorio Eljach
Secretario General
Senado de la República
La ciudad

Referencia: Presentación Proyecto de Ley Numero ____ de 2020 “Por medio del cual se crea la ley integral de la mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y se dictan otras disposiciones”.

Respetado Señor secretario,
Por medio de la presente y de conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la Constitución Política y el artículo 140 de la Ley 5 de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”, nos permitimos someter a consideración del Honorable Congreso de la República el Proyecto de Ley “*Por medio del cual se crea la ley integral de la mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y se dictan otras disposiciones*”

Cordialmente,



SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA
Senadora de la República

PROYECTO DE LEY No _____

“Por medio del cual se crea la ley integral de la mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y se dictan otras disposiciones”

**TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, facilitando el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres, garantizando el acceso efectivo y oportuno a la justicia y la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia.

ARTÍCULO 2°. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de se aplicarán en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 3°. Derechos Protegidos. La presente ley garantiza todos los derechos reconocidos por los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en especial la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños, así como los reconocidos por la normatividad interna vigente, principalmente:

1. Derecho a la dignidad humana.
2. Derecho a la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por las leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.
3. Derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado.
4. Derecho a una vida libre de discriminaciones.
5. Derecho a la salud.
6. Derecho a la educación sin estereotipos de conductas y/o costumbres fundamentadas en nociones de inferioridad y subordinación entre los sexos.
7. Derecho al trabajo sin brechas de discriminación entre sexos.
8. Derecho a la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial
9. Derecho a la libertad, integridad y formación sexual y reproductiva.
10. Derecho a gozar de medidas integrales, efectivas y no revictimizantes de asistencia, protección y seguridad.
11. Derecho a la igualdad real de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.

- ARTÍCULO 4°. Definiciones.** La presente ley tendrá en cuenta las definiciones estipuladas en los artículos 2 y 3 de la ley 1257 de 2008 y las siguientes:
1. **VIOLENCIA INDIRECTA:** Se considera violencia indirecta, toda conducta que por acción u omisión genere una práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja tanto en el ámbito público como en el privado.
 2. **VIOLENCIA SIMBOLICA:** Se considera violencia simbólica, las actuaciones indirectas que, a través de estereotipos, patrones, mensajes, o signos transmitan, reproduzcan o inciten a la dominación, desigualdad, subordinación, invisibilización y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
 3. **PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDAD:** Es la incorporación, la aplicación del Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres y hombres a las Políticas Públicas, de modo, que desde se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones, se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad real¹

TITULO II PREVENCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 5°. Vinculación conjunta y obligatoria de los poderes del Estado. Las ramas ejecutiva, legislativa y judicial adoptaran las medidas necesarias para garantizar el libre desarrollo de los derechos de las mujeres bajo parámetros de igualdad y equidad, para lo cual deberán crear estrategias que permitan el goce efectivo de los derechos de todas las mujeres, garantizando como mínimo los siguientes parámetros:

1. La eliminación de la discriminación y la desigualdad en las relaciones de poder hacia las mujeres
2. El planteamiento desarrollo y ejecución de las medidas necesarias para sensibilizar a los funcionarios y a la sociedad promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres.
3. La creación y ejecución de rutas de atención que garanticen la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, ágil y eficaz en los servicios creados para tal fin.

¹ https://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Transversalidad/

4. La creación y ejecución de rutas de atención interinstitucionales que garanticen el apoyo, acompañamiento y asistencia integral de las mujeres víctimas de violencia por los funcionarios públicos, promoviendo sanciones ejemplarizantes y procurando la reeducación de quienes ejercen violencia.
5. La adopción del principio de transversalidad el cual deberá estar presente en todas las medidas adoptadas y en la ejecución y que deberá articular interinstitucionalmente a todas las entidades del Estado.
6. La garantía al derecho a la confidencialidad, la intimidad personal y familiar, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de la víctima, o sus padres y/o representante legal tratándose de menores de edad.
7. La disponibilidad de recursos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, los cuales deberán destinarse desde la presidencia de la república para el ámbito nacional y desde las entidades departamentales y regionales para el acatamiento a nivel regional

ARTÍCULO 6°. Lineamientos básicos de las políticas públicas de mujer y equidad de género. El Estado deberá sumar todos los esfuerzos que se requieran para lograr el fortalecimiento de las comisarias de familia, inspecciones de policía, fiscalía, medicina legal y demás instituciones que dentro de sus competencias conozcan temas de violencia de género procurando por la prestación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen, debiendo garantizar y ejecutar como mínimo:

- 1.- Campañas de educación y capacitación orientadas a informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos.
- 2.- Programas de asistencia.
- 3.- Centros interdisciplinarios de atención integral para el fortalecimiento integral de las mujeres víctimas de violencia.
- 4.- Programas de reeducación y resocialización destinados a las personas que ejercen violencia.

ARTÍCULO 7°. Medidas de protección en salud. Cuando sea afectada la integridad física de la víctima el estado garantizará los procedimientos médicos, tratamientos, procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas, atención que será suministrada por Entidad Prestadora del Servicio de Salud de manera gratuita.

TITULO III DE LAS ENTIDADES QUE CONOCEN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



ARTÍCULO 8°. Fortalecimiento de la Ruta de Atención. Las entidades pertenecientes a la rama del poder público, deberán generar, crear o actualizar los lineamientos y parámetros de la ruta de atención, los cuales deberán ser centralizados y focalizados, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada entidad, garantizando así la atención oportuna e integral de las víctimas de violencia de género que se presenten dentro de la respectiva entidad.

Parágrafo 1. Las mismas entidades, deberán crear un equipo interdisciplinario, que realizará seguimiento de los casos denunciados o puestos en conocimiento del mismo, asesoría a la víctima, activará la mencionada ruta de atención y buscará la protección, teniendo en cuenta los lineamientos de la normatividad existente para casos de violencia de género, garantizando los derechos humanos de las víctimas.

Parágrafo 2. La Procuraduría General de la Nación dentro de sus funciones preventivas verificará el cumplimiento de la ruta de atención.

ARTÍCULO 9°. Acompañamiento de las Gobernaciones. Las gobernaciones deberán sumar esfuerzos y realizar trabajos con las demás entidades, para lograr que la totalidad de las Comisarias del Departamento cuenten con equipo interdisciplinario completo.

Deberán efectuar capacitaciones trimestrales a las comisarias y su equipo interdisciplinario, enfocadas al trato digno, humano y la no revictimización.

ARTÍCULO 10°. Creación de la dirección de investigación de delitos de género. La Dirección de Investigación de Delitos de Género, hará parte de la Fiscalía General de la Nación, será la encargada de investigar las diversas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Parágrafo: El Fiscal General de la Nación dentro de sus facultades creará las fiscalías que se encargarán únicamente de las investigaciones de delitos de género, las cuales estarán en todos los territorios del país.

ARTÍCULO 11°. Creación del cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género. El cuerpo de abogados para víctimas, será una dependencia de la Defensoría Pública, la cual capacitará periódicamente a sus funcionarios sobre la normatividad existente y el procedimiento para la protección y sanciones de las víctimas de violencia de género.

ARTÍCULO 12°. Objetivo del cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género: El cuerpo de abogados para víctimas garantizará el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género, haciendo efectivo el goce real de los derechos consagrados en esta ley y otras normas concordantes.

ARTÍCULO 13°. Funciones del cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género.

1. Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral a personas víctimas de violencia de género en cualquiera de sus modalidades, así como la ejercida por razones de género u orientación sexual garantizando el acceso a la justicia de las víctimas de manera oportuna y efectiva.
2. Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación entre los organismos del poder público, la fiscalía, el ministerio público, las casas de la mujer, para brindar una respuesta eficiente y oportuna.
3. Realizar actividades de formación, capacitación técnica, actualización normativa, sensibilización de los funcionarios de las instituciones públicas, especialmente la administración de justicia.

ARTÍCULO 14°. Del Ministerio de Justicia y del Derecho. El Ministerio de Justicia y del Derecho, diseñará e implementará programas orientados a la lucha contra los estereotipos respecto de la participación política de las mujeres, la formación con enfoque de género y el empoderamiento.

ARTÍCULO 15°. Del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, implementará el programa educar en igualdad y desarrollará las bases para que todos los establecimientos educativos en asocio con las secretarías de educación departamentales.

TITULO IV
PREVENCIÓN, ERRADICACIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA HACIA MUJERES

ARTÍCULO 16°. El Gobierno Nacional dentro de sus competencias expedirá las normas, estrategias y mecanismos tendientes a la prevención, atención y sanción de todos los actos individuales o colectivos constitutivos de violencia política hacia mujeres, garantizando el ejercicio democrático, participativo y real de sus derechos políticos y eliminando los actos, conductas o manifestaciones de acoso y violencia política que afecten la función política y pública de las mujeres.

ARTÍCULO 17°. Normatividad concordante: Para la creación de las normas, estrategias y mecanismos de prevención el Gobierno Nacional tendrá en cuenta las disposiciones de las leyes 294 de 1996, 1010 de 2006, 1257 de 2008 y demás normas concordantes.

ARTÍCULO 18°. Actos de violencia política: Se considerarán actos de violencia política, las siguientes:

1. Hacer incurrir en error a las mujeres candidatas, electas o designadas, o a las servidoras públicas, mediante información falsa o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones.

2. Impedir por cualquier medio que las mujeres asistan a reuniones y sesiones de cuerpos colegiados, que participen en la toma de decisiones, que tengan libre y espontáneo derecho a voto y voz en igualdad de condiciones a los demás miembros.
3. Restringir el derecho al uso de la palabra de las mujeres dentro de las sesiones o reuniones de carácter político, o la participación en comisiones, comités o instancias similares.
4. Divulgar información falsa o imprecisa relativa a las funciones públicas que ejerce la mujer, que ponga en tela de juicio su trabajo y/o que pretenda desprestigiar su gestión.
5. Divulgar información personal y privada de las mujeres candidatas, electas, designadas o servidoras públicas, con el propósito de atentar contra su dignidad, intimidad o contra la de su familia.
6. Amenazar o intimidar a una mujer y/o a su familia, con el propósito de menoscabar o anular sus derechos políticos.
7. difamar, calumniar o injuriar a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género.
8. Las demás que contemple la ley y los tratados y convenciones internacionales ratificadas por Colombia.

ARTÍCULO 19°. Obligaciones de los partidos y movimientos políticos: Los partidos y/o movimientos deberán expedir dentro de su reglamento un acápite especial que garantice el goce pleno y real de los derechos políticos de las mujeres en el ejercicio de la función política.

Parágrafo: En cumplimiento del inciso anterior se deberá definir el proceso a seguir y las sanciones correspondientes, determinando además una ruta de atención clara para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género pertenecientes al partido o movimiento político.

El partido o movimiento político deberá desarrollar una base de datos actualizada que permita conocer los casos de violencia política y la reacción y atención efectuada, la cual tendrá que suministrarse año a año al ministerio de justicia y del derecho para retroalimentación.

TITULO V PROTECCIÓN A LAS COMUNIDADES ESPECIALES

ARTICULO 20°. Protección especial. El Estado garantizará el desarrollo de los derechos de todas las comunidades especialmente y mujeres indígenas, campesinas, lideresas sociales, afrodescendientes y raizales, evitando la exclusión política, social, cultural y económica y eliminando cualquier forma de violencia.

ARTÍCULO 21°. Creación de la Comisión Nacional para la Equidad de la Mujer con enfoque especial de cultura para comunidades indígenas, campesinas, lideresas sociales, afrodescendientes y raizales. La comisión nacional para la equidad de las mujeres campesinas, lideresas sociales, afrodescendientes y

raizales, será con enfoque a todas aquellas comunidades especiales reconocidas en el territorio colombiano; con participación de hasta 2 delegadas de cada comunidad, los cuales se reunirán como mínimo dos veces por semestre y presentaran informes sobre los avances, necesidades y programas establecidos por la mencionada comisión, bajo la supervisión y acompañamiento de los y las integrantes de las comisiones para la Equidad de la Mujer, pertenecientes a las asambleas y concejos a nivel nacional.

Parágrafo. La comisión nacional para la equidad de las mujeres campesinas, lideresas sociales, afrodescendientes y raizales, debe buscar estrategias para reducir la Violencia de género, la discriminación y facilitar el acceso a la justicia de las mujeres pertenecientes a comunidades especiales.

ARTÍCULO 22°. Capacitación Institucional. Dentro de los procesos de capacitación e inducción laboral en las entidades estatales y quienes contraten con el estado, las dependencias encargadas deben generar estrategias educativas que busquen eliminar los posibles prejuicios patriarcales y de discriminación contra las mujeres de comunidades especiales; cada entidad debe contar con un cuerpo interdisciplinario que garantice la comunicación, la capacitación en temas interculturales y de género.

ARTÍCULO 23°. Perspectiva integral estatal. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, deben garantizar el acceso de las mujeres de comunidades especiales a la justicia estatal, el estado debe actuar con la debida diligencia y aplicar una perspectiva integral en el sistema judicial, tomando en cuenta las particularidades de las mujeres indígenas, su género, sus condiciones socioeconómicas, su situación especial de vulnerabilidad y su cultura.

ARTÍCULO 24°. Currículo académico para comunidades especiales. El Ministerio de Educación en compañía y asesoría del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Consejería para la Equidad de la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los gobiernos departamentales; realizaran el currículo para educación básica primaria y secundaria de las comunidades especiales del territorio nacional; adecuándose a la infraestructura existente, a sus orígenes, costumbres, creencias y tradiciones, situación socioeconómica y ubicación geográfica. El Ministerio de Educación se encargará de garantizar los intérpretes calificados en caso de ser necesarios para la promulgación de la herramienta y guía educativa.

ARTÍCULO 25°. Participación activa. Es responsabilidad del gobierno nacional y departamental, asegurar la creación de espacios para la participación plena y activa de las mujeres indígenas en la formulación y ejecución de políticas y programas, a nivel local, regional.

Parágrafo. Erradicación de discriminación institucional. Reconocer los conceptos indígenas, afrodescendientes y raizales de comunidad, cultura y vida familiar y revisar políticas públicas, programas y leyes desde una perspectiva de género e intercultural.

TITULO VI CERACIÓN OBLIGATORIA DE REGISTROS ÚNICOS Y BASES DE DATOS

ARTÍCULO 26°. Registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Créese el Registro Nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que estará a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho y permitirá la individualización genética facilitando las imputaciones penales y discriminando a las personas acusadas erróneamente.

ARTÍCULO 27°. Base de datos Nacional de casos de violencia de género y feminicidios. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en asocio con el Ministerio de Justicia y del Derecho, crearán la base datos nacional de violencia de género y feminicidios, a la cual tendrán acceso las comisarias de familia, las entidades del sector salud, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía Nacional y la Fiscalía.

parágrafo: Las entidades mencionadas en el artículo anterior deberán alimentar la mencionada base de datos en tiempo real.

Artículo 28°. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.



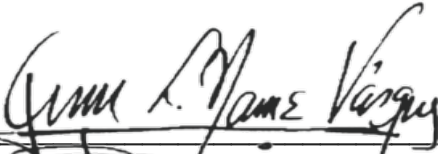
SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA
Senadora de la República



LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA
Representante a la Cámara
Partido Alianza Verde



Juan Luis Castro Córdoba
Senador de la República
Partido Alianza Verde



IVÁN LEONIDAS NAME VÁSQUEZ
Senador de la República
Partido Alianza Verde




ANTONIO SANGUINO PAEZ
Senador de la República
Partido Alianza Verde



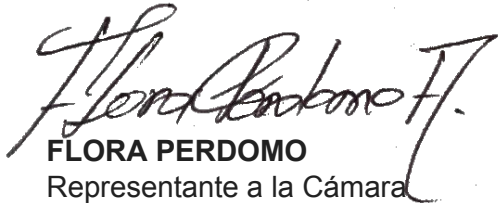
CÉSAR ORTIZ ZORRO
Representante a la Cámara
Partido Alianza Verde



ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
Representante a la Cámara por el Tolima



IVAN MARULANDA
Senador de la República



FLORA PERDOMO
Representante a la Cámara



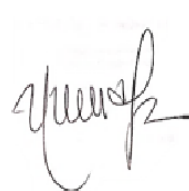
JENNIFER KRISTIN ARIAS
Representante a la Cámara
Partido Centro Democrático



AMANDA ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Senadora de la República



FABIÁN DÍAZ PLATA
Representante a la Cámara
Alianza Verde



NORMA HURTADO SÁNCHEZ
Representante a la Cámara Valle del Cauca

Jorge Eduardo Londoño
Senador de la República



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Son múltiples los esfuerzos que, desde el Gobierno, el Congreso, las entidades estatales, organizaciones, fundaciones y grupos académicos se han venido haciendo para fortalecer las políticas de protección de la mujer desde el ámbito de la equidad, sin embargo, aunque el trabajo ha sido arduo no ha sido posible siquiera demostrar la efectividad a través de la disminución de cifras, todo lo contrario ha sido una constante el aumento de los casos de violencia contra la mujer y esta es una situación que no podemos normalizar, ni dejar pasar como si no fuera algo que ameritara esfuerzos mayores.

1. LA IMPORTANCIA DEL PROYECTO:

La historia ha dado cuenta de la vida de la mujer desde una perspectiva segregada, en la que su labor era limitada al cumplimiento de los oficios del hogar, ser madre, ama de casa, lavar, planchar y por su puesto obedecer las decisiones que el hombre de la casa tomaba en el entorno familiar. Hablamos entonces de entornos en los que predominaba la esencia de lo masculino y en el que el maltrato y la inequidad hacían parte de lo cotidiano.

Más adelante la mujer comienza a ocupar algunos roles relacionados directamente con su género y con la esencia de ser madre como la docencia y la enfermería, pero es en el siglo XX en el que se empieza a materializar el tema de la liberación femenina que ha permitido que las mujeres recorran una senda amplia y antes casi improbable destinada a la preparación, superación y la ampliación de espacios importantes de decisión y ejecución ejercidos por ellas.

Sin embargo, el tema de desigualdad, inequidad y violencia sigue siendo una constante que va más allá de las cifras y que se desarrolla bajo parámetros de costumbre y normalidad, situación que hace que el esfuerzo de las entidades se redoble con el único fin de lograr trabajar en la erradicación de la normalización frente a cualquier tipo de violencia contra la mujer, buscando estrategias para la formación de un apoyo efectivo que permita a todas las mujeres su desarrollo integral y que le apunten a la erradicación y/o disminución significativa de este flagelo.

Es imposible desconocer que la violencia contra la mujer interrumpe su desarrollo integral y atenta contra su vida, pues luego de vivir años en situaciones violentas "*palo seguido de beso, para que haya más palo y luego otro beso*" (Juan Carlos Esguerra), por lo general el final de estas circunstancias inicuas es fatal, convirtiéndose en un problema de salud pública y de seguridad ciudadana que perturba en todos los espacios del territorio nacional y que afecta principalmente el

hogar volviéndose un espacio inseguro para las señoras y sus hijos (as), creando un círculo vicioso, en el que los menores se crían en ambientes violentos y crecen pensando que la violencia es una forma justificada de actuar, siendo ineludible resaltar que este tipo de comportamientos en contra de las mujeres es una realidad que sobrepasa factores de clase, etnia, raza, edad, capacidad física, estado civil, religión o filiación política.

Entonces, no es posible seguir legislando frente a un mismo tema de manera desarticulada y por distintos caminos, expidiendo leyes que impongan funciones a diferentes entidades que se vuelven estados independientes en la lucha de la erradicación de la violencia contra la mujer, el fin es el mismo y esto es lo que obliga a que la expedición de normas sea responsable y que se implementen todos los mecanismos que sean necesarios para combatir los flagelos en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres.

La ley integral de la mujer es una necesidad, este es el momento de que se configure un trabajo en conjunto que permita una atención integral, idónea y oportuna, en el que se faculte a los primeros respondientes para tomar medidas en favor de la seguridad de las víctimas y de sus familiares, que se sustente en la dignificación de la víctima, lo que debe superar y erradicar la revictimización de la misma y en el que las cifras no mientan, ni sean diferentes para cada entidad.

Garantizar y promover el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, es una prelación, que hace que lograr el respeto, la equidad, el progreso y la paridad sea posible. La protección al derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad física, psicológica-moral, sexual, patrimonial y laboral, encaminan el resultado de esta ley que contempla medidas destinadas a la protección de la mujer y a la prevención de la violencia de género, como eje fundamental para la erradicación de este flagelo, se trata de medidas de aplicación inmediata de carácter protector, discrecional y sancionatorio.

2. PRECISIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO:

A nivel internacional es imprescindible traer a colación la definición dada en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, publicada el 23 de febrero de 1994 (ONU, 1993), la cual en su artículo primero estipula que la violencia contra la mujer es todo suceso de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como efecto un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las intimidaciones de tales sucesos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, producidos en la vida pública como en la vida privada.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se refiere al tema como: *“toda distinción, exclusión o restricción basada en el*

sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

La ley 1257 de 2008 en su artículo 2, define la violencia contra la mujer como: *“cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado (...)”.* (Congreso de la República, 2008)

Por su parte la Jurisprudencia Colombiana se refiere a la violencia de género como estructural por surgir para la conservación de una escala de valores lo que le da un carácter de normalidad a un orden social establecido históricamente (Corte Constitucional, 2014).

Definición que ha sido apoyada por varias doctrinitas es el caso de Ortiz Calle, quien ha ajustadamente señaló *“La violencia de género no se limita al ámbito familiar, es una violencia estructural, basada en un sistema de creencias sexista (superioridad de un sexo sobre otro), que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino hegemónico”*

3. TIPOS DE VIOLENCIA:

la ley 1257 de 2008, contempla cuatro tipos de violencia contra la mujer refiriéndose al daño psicológico, daño o sufrimiento físico, daño o sufrimiento sexual y daño patrimonial, los cuales son definidos de la siguiente manera:

Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.

Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.

Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.

Daño o sufrimiento Patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. Pese a que la normatividad referida contempla diferentes tipos de daño, es pertinente resaltar la necesidad de incluir como un tipo de violencia la referente al daño político y a los menoscabos en la vida laboral.

4. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO:

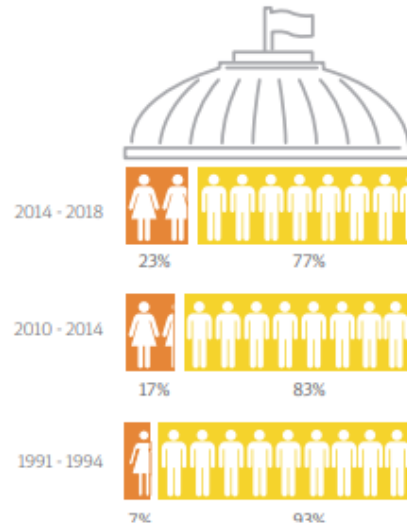
El 8 de septiembre de 2000, 189 Estados miembros de las Naciones Unidas, dentro de los que se encuentra Colombia aprobaron la Declaración del Milenio desarrollada bajo los valores de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto por la naturaleza y responsabilidad común, acordándose los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En desarrollo de estos se estipula en el objetivo numero 3 el de promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer a fin de que se efectivice la participación plena y equitativa de las mujeres en todos los sectores, resaltándose la ciudadanía paritaria fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Importante es reconocer el avance que ha tenido nuestro país frente a este objetivo, hemos ratificado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, hemos expedido de manera enérgica distintas leyes tendientes a garantizar la equidad de género y a proteger los derechos humanos de todas las habitantes del territorio colombiano, siendo una lucha constante el tema de la violencia de género, que si bien ha contado con respaldo legislativo el progreso no ha sido el esperado.

Al respecto el informe de los ODM, del año 2015, estableció un gran avance para nuestro país en lo que respecta a la participación política y los cargos de elección popular, haciendo un análisis de los periodos representativos en el cual se estableció que para el periodo 2014- 2018 casi 1 de cada 4 curules en el Congreso fueron ocupadas por mujeres, mientras que en el periodo electoral previo (2010-2014) la cifra era ligeramente superior a 1 de cada 6 y a comienzos de la década de los 90's se hablaba de 1 de cada 14 mujeres en este cargo de elección (Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2015. P. 24)

Proporción de escaños ocupados por mujeres en el congreso nacional



Fuente: Elaboración PNUD de información Registraduría nacional del estado civil 2

5. EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN DE LA MUJER EN COLOMBIA:

En nuestro ordenamiento existen 28 normas que se han expedido en favor de proteger y garantizar los derechos de las mujeres, desde 1995 han buscado hacer frente a la problemática de la violencia contra por el hecho de ser mujer, veamos:

<p>Ley 248 de 1995 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.”</p>	<p>hace parte de las acciones afirmativas del bloque de constitucionalidad que armonizan el derecho a la igualdad. Obliga a los Estados a abstenerse de realizar acciones que directa o indirectamente generen situaciones de discriminación basándose en el respeto de los derechos humanos, idealizando la inclusión de la perspectiva de género en todos los ámbitos, la cual para la Organización de los Estados Americanos es: “necesaria para promover la igualdad y no discriminación, así como la libertad religiosa y el fortalecimiento del Ejes estratégicos.” (OEA, 2017)</p>
<p>Ley 294 de 1996 “Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.”</p>	<p>reglamentada con el decreto 652 de 2001- desarrolla el inciso 5 del artículo 42 Constitucional -la familia como núcleo fundamental de la sociedad- estableciendo que Cualquier forma de violencia en la familia es</p>

² <https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odsinformedoc-2015.pdf>



	destruictiva y atenta contra la armonía y la unidad, y será sancionada conforme a la Ley. En progreso de esta normatividad se habla entonces de medidas de protección en el caso de violencia intrafamiliar, modificadas en el año 2008 con la Ley 1257 contemplándose las medidas de protección que se pueden imponer, las sanciones en caso de incumplimiento de las mismas y los procedimientos que se deben seguir en los diferentes casos.
Ley 360 de 1997 “Por medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del Libro II del Decreto-ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la libertad y pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal) y se dictan otras disposiciones.”	Contempla un endurecimiento de las Leyes, plasma los derechos de las víctimas de delitos contra la integridad sexual y la dignidad humana.
Ley 575 de 2000 “Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996.”	Reforma que se refiere a las medidas de protección de las cuales gozan las personas que sean sujetos pasivos y/o víctimas de conductas que se relacionen con la violencia intrafamiliar. En este orden de ideas se establece el artículo 4 de esta normatividad: “Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.”
Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal) y la ley 599 de 2000 (Código Penal)	La ley 600 de 2000 trae consigo la querrela como requisito obligatorio dentro de la conciliación en el trámite de violencia intrafamiliar. La ley 599 de 2000 renueva lo ateniende a la violencia sexual e intrafamiliar en contra de la mujer.
Ley 742 de 2002 “Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)”	obliga a los Estados Partes a incluir en la mencionada Corte juristas especializados en temas contra la mujer y los niños.
ley 882 de 2004 “Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000.”	descarta el delito sexual como causante del delito de violencia intrafamiliar y se aumenta su pena.

<p>ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”</p>	<p>Desarrolla el proceso bajo parámetros de dignidad y no revictimización, en este entendido las víctimas de delitos sexuales no deben rendir testimonio, sino que tienen la posibilidad de relatar y registrar los hechos de manera individual y privada a través de personal competente, apuntándole a la materialización de un proceso reparador.</p>
<p>Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.”</p>	<p>Con esta se adoptaron medidas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, se define la violencia contra la mujer y se desarrollan diferentes conceptos relacionados con el asunto.</p> <p>Despliega los derechos de las mujeres y las víctimas. En esta misma línea, dicha normatividad contempla las sanciones y tipifica el delito de acoso sexual.</p> <p>Además de tener un carácter sancionatorio, tiene uno preventivo, en este sentido el artículo 9 estableció: “El Gobierno Nacional: 1. Formulará, aplicará, actualizará estrategias, planes y programas nacionales integrales para la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. 2. Ejecutará programas de formación para los servidores públicos que garanticen la adecuada prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de la violencia, con especial énfasis en los operadores/as de justicia, el personal de salud y las autoridades de policía.” (Congreso de la República, 2008)”</p>
<p>Decreto Ley 4796 de 2011 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 8, 9, 13 Y 19 de la Ley 1257 de 2008 y se dictan otras disposiciones”</p>	<p>involucra el Sistema General de Seguridad Social en Salud, definiendo acciones para detectar, prevenir y atender a las mujeres víctimas de violencia, implementando mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud.</p>
<p>Decreto Ley 4799 de 2011 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008</p>	<p>Regula las competencias de las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías, buscando lograr el acceso efectivo de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la Ley para su protección.</p>
<p>Ley 1542 de 2012 “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.”</p>	<p>elimina el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.</p>
<p>ley 1639 de 2013 “Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con</p>	<p>Conocida como la ley sobre ataques con ácido, fortalece las medidas de protección para las víctimas de crímenes con ácido álcalis o</p>



<p>ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000.”</p>	<p>sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, para lo cual modifíco el artículo 113 de la ley 599 de 2000, aumentando las penas de prisión. Estipula la regulación de la venta de ácidos, se crea la ruta de atención integral para las víctimas y establece las medidas de protección en salud instituyendo la gratuidad de los procedimientos reconstructivos de fisonomía y funcionalidad.</p>
<p>Ley 1761 de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely)”</p>	<p>se estableció en materia penal, el delito autónomo de feminicidio en el artículo 104 A</p>

6. DE LA VIOLENCIA POLÍTICA:

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” fue el primer tratado internacional que consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

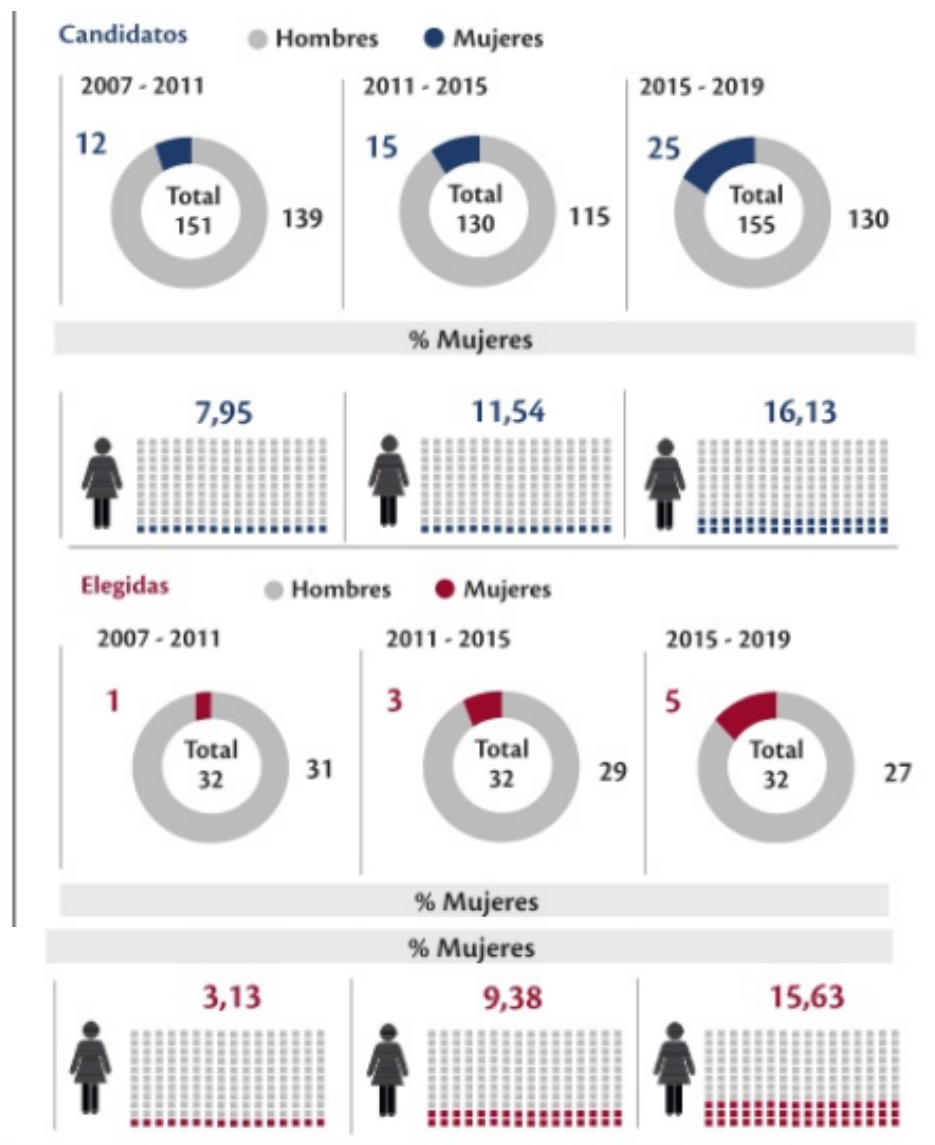
La violencia política entendida como el conjunto de actos directos, ofensivos y lesivos que atacan a una persona como consecuencia de sus derechos políticos que buscan atentar, modificar o cambiar dichos procesos, es una problemática que debe ser tratada y que en nuestro país afecta en mayor medida a las mujeres. Para las elecciones locales de 2015 el país dio un paso agigantado disminuyendo de manera considerable los niveles de violencia, resultado que se revirtió en el 2019 cuando se registraron 265 acciones tendientes a entorpecer el proceso político y democrático del momento. Para este año 36 personas resultaron heridas en ataques de violencia política, lo cual representa un aumento del 50 % frente a las cifras de 2015.

No podemos desconocer que la participación de las mujeres en el ejercicio político de nuestro país se ha incrementado paulatinamente, aumento que tuvo mucho que ver con la expedición de la ley 1475 de 2011 que establece el porcentaje mínimo de mujeres en las listas de los partidos, lamentablemente esta ley se convirtió en requisito que hace que la gran mayoría de las mujeres candidatas sean usadas como un relleno dentro las listas presentadas un tipo de violencia a todas luces discriminatorio y que evidencia las fallas desde las precandidaturas.

La consolidación de la democracia es un objetivo en el que las mujeres juegan un papel fundamental que permite acciones afirmativas tendientes al progreso y reconocimiento verdadero y pleno de los derechos de nuestras mujeres.



PARTICIPACION FEMENINA EN LAS ELECCIONES A LA GOBERNACIÓN



CURULES CAMARA Y SENADO

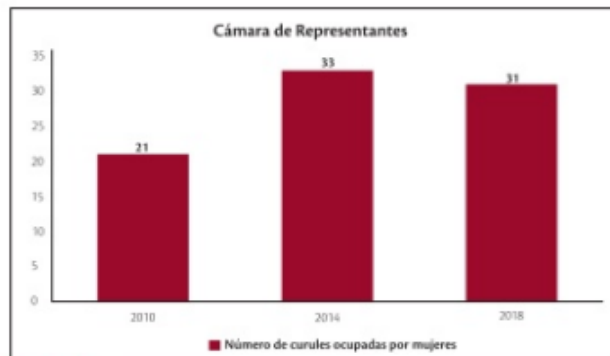
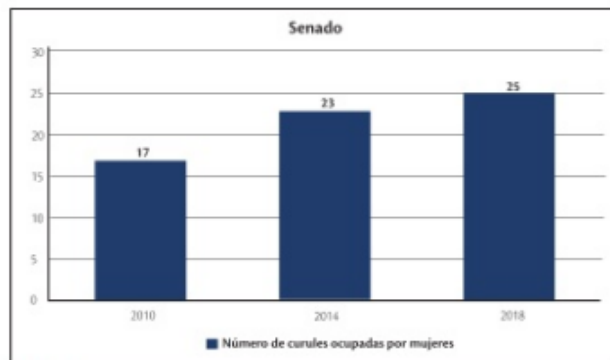


Gráfico 5. Curules ocupadas por mujeres en la Cámara de Representantes y su evolución en las últimas tres elecciones. **Fuente:** Registraduría Nacional del Estado Civil.



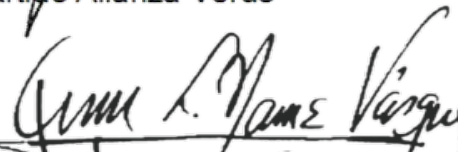
Es este el momento para establecer mecanismo de prevención, atención y sanción contra actos individuales de acoso y/o violencia política hacia mujeres garantizando el ejercicio de sus derechos políticos.

Por la cual se dictan normas de protección integral de la mujer sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley [294](#) de 1996 y se dictan otras disposiciones.

SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA
Senadora de la República


LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA
Representante a la Cámara
Partido Alianza Verde


Juan Luis Castro Córdoba
Senador de la República
Partido Alianza Verde

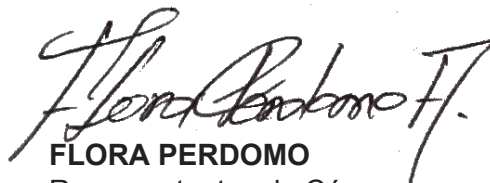

IVÁN LEONIDAS NAME VÁSQUEZ
Senador de la República
Partido Alianza Verde


ANTONIO SANGUINO PAEZ
Senador de la República
Partido Alianza Verde


CÉSAR ORTIZ ZORRO
Representante a la Cámara
Partido Alianza Verde


ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
Representante a la Cámara por el Tolima


IVAN MARULANDA
Senador de la República

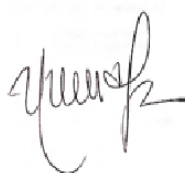

FLORA PERDOMO
Representante a la Cámara


JENNIFER KRISTIN ARIAS
Representante a la Cámara
Partido Centro Democrático


AMANDA ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Senadora de la República



FABIÁN DÍAZ PLATA
Representante a la Cámara
Alianza Verde



NORMA HURTADO SÁNCHEZ
Representante a la Cámara Valle del Cauca



Jorge Eduardo Londoño
Senador de la República

